



# XAVIER GIL PECHARROMÁN

PERIODISTA

## NOVEDADES DESTACADAS 87

*En esta ocasión, en el ámbito legislativo, destacamos que el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece un marco común de actuación para reforzar la eficacia, la seguridad y la coordinación entre las distintas Administraciones y dispositivos operativos implicados en la lucha contra los incendios forestales. Por otra parte, en el BOE se han publicado el Real Decreto 39/2026, de 21 de enero, publicado en el BOE del 22 de enero, fija un incremento general del 2,7 por ciento para las pensiones contributivas de la Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado, buscando preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios. En el capítulo jurisprudencial, destacamos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que es contraria al Derecho de la UE la norma de exención IVA de prestaciones por servicios a miembros por agrupaciones de personas con actividad exenta. Además, el Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Baleares contra la Ley por el Derecho a la Vivienda*

# LEGISLACIÓN

## Refuerzo de la prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se desarrollan medidas de coordinación instrumental para la prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales.

La norma establece un marco común de actuación para reforzar la eficacia, la seguridad y la coordinación entre las distintas administraciones y dispositivos operativos implicados en la lucha contra los incendios forestales.

Este nuevo real decreto responde a un riesgo creciente que afecta a todo el territorio nacional, intensificado por los efectos del cambio climático, con incendios cada vez más extensos, rápidos y complejos. La nueva norma refuerza la capacidad del sistema público para anticiparse y responder de forma coordinada ante emergencias, mejorando la interoperabilidad de medios y la seguridad del personal que interviene en las tareas de extinción de los incendios forestales.

El real decreto es coherente con los compromisos asumidos en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que impulsa políticas públicas coordinadas para reducir riesgos y aumentar la resiliencia del territorio frente a fenómenos extremos. Esta norma supone un paso decisivo en la consolidación de un sistema nacional de gestión de emergencias por incendios forestales, basado en la cooperación institucional, la prevención y la protección de los ecosistemas.

La norma articula cinco actuaciones clave destinadas a mejorar la coordinación operativa y la seguridad en la gestión de incendios forestales:

Calificación homogénea de las unidades de extinción, que permitirá una identificación común de capacidades y facilitará la colaboración entre las diferentes administraciones públicas.

Protocolo común para el uso de medios aéreos, con criterios técnicos unificados para incrementar la seguridad y eficiencia de las operaciones con aeronaves.

Indicativos de radio unívocos, que armonizan la codificación de comunicaciones y reducen el riesgo de errores durante situaciones de emergencia.

Simbología común para mapas operativos, que facilita la interpretación compartida de la información geoespacial y la toma de decisiones en tiempo real.

Establecimiento de estándares de seguridad y equipos de protección individual (EPI), garantizando la protección del personal interviniente conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales.

Un sistema integrado, coordinado y seguro

Estas medidas se integran en el sistema común de gestión de emergencias previsto en la Ley 43/2003, de Montes y han sido elaboradas en el marco de los grupos técnicos especializados del Comité de Lucha contra Incendios Forestales, con la participación de todas las administraciones competentes. El enfoque técnico del real decreto refuerza la cooperación entre niveles de gobierno, respetando el marco competencial y mejorando la respuesta conjunta ante incendios de gran magnitud.

El objetivo último es proteger a la ciudadanía, salvaguardar los recursos naturales y garantizar la seguridad del personal que trabaja sobre el terreno, mediante una planificación preventiva más sólida y una respuesta operativa más eficaz en situaciones de emergencia.

## **Cuantía inicial y revalorización 2026 de las pensiones públicas**

El Real Decreto 39/2026, de 21 de enero, publicado en el BOE del 22 de enero, establece la limitación de la cuantía inicial de las pensiones públicas y revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2026.

La normativa fija un incremento general del 2,7 por ciento para las pensiones contributivas de la Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado, buscando preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios.

Asimismo, define un límite máximo para la cuantía inicial de las pensiones, situado en 3.359,60 euros mensuales o 47.034,40 euros anuales. El texto regula también los complementos por mínimos, exigiendo requisitos de residencia y límites de ingresos para quienes no alcanzan las cuantías básicas.

Adicionalmente, se detallan las condiciones para el percibo de múltiples pensiones y se ajustan prestaciones destinadas a reducir la brecha de género y proteger a colectivos vulnerables. Esta disposición legal garantiza la ejecución de las medidas económicas necesarias ante la prórroga presupuestaria del ejercicio actual.

El criterio fundamental es la aplicación de un incremento del 2,7 por ciento sobre la cuantía de las pensiones. Este porcentaje se deriva del valor medio de las tasas de variación interanual del IPC de los doce meses previos a diciembre del año anterior. Este incremento se aplica a:

Las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) causadas con anterioridad al 1 de enero de 2026. También, a las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado. Las prestaciones de gran invalidez del Régimen Especial de las Fuerzas Armadas y de los Funcionarios Civiles del Estado.

Se establece un tope para la cuantía inicial y para la suma de las pensiones concurrentes. El importe íntegro no podrá superar los 3.359,60 euros mensuales o los 47.034,40 euros anuales. Si una persona tiene derecho a dos o más pensiones públicas, la suma de todas ellas está sujeta a este límite, minorándose proporcionalmente si se excede dicha cantidad.

Se establecen en 8.803,20 euros anuales las pensiones no contributivas (jubilación e invalidez). Además, se fija un complemento de 525,00 euros anuales para quienes carezcan de vivienda en propiedad y residan en alquiler.

Las pensiones no concurrentes del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) extinguido se fijan en 8.394,40 euros anuales.

El complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género queda establecido en 36,90 euros mensuales. Se fijan cuantías específicas, como 1.000 euros anuales para la asignación por hijo menor de 18 años con discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Estas prestaciones no siguen el 2,7%, sino que se incrementarán en el mismo porcentaje que se apruebe para el salario mínimo interprofesional para 2026.

### *Reglas de aplicación y exclusiones*

La revalorización se aplica al importe mensual que tenía la pensión a 31 de diciembre de 2025, excluyendo conceptos como los complementos por mínimos anteriores o recargos por falta de medidas de seguridad.

Si tras la revalorización la pensión no alcanza los mínimos establecidos (detallados en los anexos de la norma), se aplicará un complemento por mínimos para alcanzar la cuantía garantizada, siempre que el beneficiario cumpla los requisitos de residencia y límites de ingresos.

Existen pensiones que no se revalorizan, como las de Clases Pasivas a favor de Camineros del Estado causadas antes de 1985 (con excepciones) o determinadas pensiones de Mutualidades que ya alcanzaron ciertos niveles en 1973.

## **Nuevos criterios de competencia aplicables a las oficinas consulares del Registro Civil**

La Instrucción de 9 de enero de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, publicada en el BOE del 23 de enero, establece criterios de competencia aplicables a las oficinas consulares del Registro Civil.

El texto subraya la transición hacia un sistema electrónico unificado denominado DICIREG, el cual permite una gestión más ágil y conectada de los trámites legales desde el extranjero. Se definen con precisión las competencias territoriales de cada sede para registrar nacimientos, matrimonios u otros actos jurídicos basados en documentos internacionales.

Asimismo, se regula el papel de estas oficinas como ventanilla única para el ciudadano, facilitando el intercambio de expedientes entre la administración central y las delegaciones diplomáticas.

La resolución aclara que estos cambios no modifican los procesos específicos relacionados con la Ley de Memoria Democrática para la obtención de la nacionalidad.

El cambio más inmediato es la superación de la llevanza de libros manuscritos, lo que implica la plena digitalización de la tramitación y realización de asientos. Gracias a DICIREG, el Registro Civil se reconfigura como una base de datos única, electrónica y accesible, permitiendo que la información sea interoperable tanto entre las distintas oficinas consulares y generales como con otros operadores externos.

El sistema permite desvincular el lugar de presentación de la solicitud de la oficina que finalmente resuelve el expediente. Las oficinas consulares actúan como punto de acceso único para el ciudadano, atendiendo solicitudes siempre que exista algún punto de conexión (como el domicilio), independientemente de qué oficina sea la competente para la inscripción final.

Si el hecho a inscribir no ocurrió en la demarcación consular donde se presenta la solicitud, DICIREG permite registrar el procedimiento y reasignarlo electrónicamente a la oficina competente (ya sea otra oficina consular, la Oficina Central o una Oficina General en España).

### *Gestión inteligente de competencias y duplicidades*

El sistema digital optimiza la distribución de tareas y la seguridad jurídica. Antes de iniciar cualquier trámite, el sistema permite verificar globalmente que no existe ningún procedimiento abierto por el mismo solicitante y materia en otra oficina del Registro Civil, evitando la doble tramitación.

Para realizar anotaciones secundarias (notas marginales), DICIREG determina el flujo de trabajo. Si la inscripción principal ya está digitalizada en DICIREG, la oficina local realiza todo el trámite; si no lo está, el sistema permite reasignar la solicitud a la oficina donde conste dicha inscripción principal.

Mientras que las Oficinas Generales en España dejan de tramitar procedimientos basados en documentos públicos extranjeros (enviándolos a la Oficina Central), las oficinas consulares mantienen la competencia para tramitar e inscribir estos documentos conforme a la Ley, utilizando DICIREG para su gestión.

El sistema también se utiliza para el registro, tramitación y reasignación de los expedientes de opción a la nacionalidad española derivados de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, permitiendo incluso la adopción de medidas organizativas de reparto de carga de trabajo entre oficinas del mismo país.

Transformación Digital y Función Pública convoca un periodo de consulta pública s sobre la reforma del Foro de Gobierno abierto

La Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha convocado un periodo de consulta pública s sobre la reforma del Foro de Gobierno abierto, entre los días 16 y 30 de enero de 2026.

Este organismo, fundamental para cumplir con los estándares de la Alianza para el Gobierno Abierto, ha sido responsable de diseñar planes estratégicos mediante procesos de escucha activa y talleres deliberativos.

Con la reciente aprobación del V Plan de Gobierno Abierto (2025-2029), se busca actualizar su normativa para convertirlo en un órgano colegiado con una base jurídica más sólida y estable.

El objetivo central de esta reforma es mejorar su eficiencia operativa, garantizar un entorno más inclusivo y consolidar la cocreación de políticas públicas. De este modo, la iniciativa pretende blindar la calidad democrática y la transparencia, asegurando que la participación ciudadana sea el eje motor de la gobernanza institucional.

Los objetivos principales para el fortalecimiento del Foro de Gobierno Abierto se enmarcan en la necesidad de renovar este espacio tras la aprobación del V Plan de Gobierno Abierto (2025–2029) y se articulan a través de una nueva iniciativa normativa que busca actualizar su regulación vigente.

De acuerdo con la documentación proporcionada, los objetivos centrales y problemas que se pretenden solucionar son los siguientes:

El objetivo primordial es dotar al Foro de un marco jurídico más sólido y adecuado a su relevancia. Para ello, se plantea elevar su rango normativo, pasando de la actual Orden Ministerial a su constitución mediante Real Decreto, conforme al artículo 22 de la Ley 40/2015. Este cambio busca reforzar su legitimidad institucional y garantizar su funcionamiento como un espacio estable de participación entre las Administraciones Públicas y la sociedad civil.

Se busca transformar el Foro para que sea un espacio más inclusivo, eficaz y representativo. La renovación del órgano tiene como fin favorecer una participación activa de la sociedad civil y asegurar un entorno plural para el diálogo democrático, solucionando así las limitaciones operativas previas.

La nueva norma tiene como objetivo consolidar al Foro como el instrumento clave y permanente para el diálogo estructurado y la cocreación de políticas públicas entre la sociedad civil y la Administración. Esto reafirma su función esencial no solo en el debate, sino en la transformación de propuestas ciudadanas en compromisos concretos.

Es necesario adaptar el Foro a los nuevos estándares de participación recogidos en el V Plan de Gobierno Abierto y a los principios de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). Esta actualización responde directamente al cumplimiento del Compromiso 1 del V Plan (medida 1.3.1), centrado específicamente en el fortalecimiento de la participación y del espacio cívico.

las diferencias fundamentales entre la regulación vigente y los objetivos planteados por el V Plan de Gobierno Abierto (2025–2029) se centran en la jerarquía normativa, la solidez institucional y los estándares de participación:

La regulación actual se sustenta en una norma de rango inferior, la Orden HFP/134/2018, de 15 de febrero. Por el contrario, el V Plan impulsa la elevación de este rango, proponiendo que el Foro se regule mediante Real Decreto, conforme al artículo 22 de la Ley 40/2015, para otorgarle un marco jurídico más sólido y adecuado.

Mientras que la regulación actual estableció el Foro como espacio de diálogo, el V Plan busca trascender esta etapa para reforzar su legitimidad institucional. El objetivo es garantizar su funcionamiento como un órgano colegiado estable y permanente, superando las limitaciones de la estructura actual.

Aunque el Foro actual ya permite el diálogo estructurado, el V Plan diagnostica la necesidad de hacerlo más inclusivo, eficaz y representativo. Se busca adecuar el funcionamiento del órgano a los nuevos estándares de participación definidos en el propio V Plan (medida 1.3.1) y en la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), con el fin de consolidar su papel en la cocreación de políticas públicas.

## **Nuevo coeficiente de consumo y valor añadido bruto para optar a la categoría de consumidor electrointensivo**

La Resolución de 16 de enero de 2026, de la Secretaría de Estado de Industria, publicada en el BOE del 21 de enero, revisa el cociente entre consumo y valor añadido bruto para optar a la categoría de consumidor electrointensivo al que se refiere el artículo 3 del Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos.

La normativa ajusta el umbral de intensidad eléctrica a un valor de 0,61 kWh/€, ratio que vincula el gasto energético con el valor añadido bruto de cada instalación. Este cambio responde a las fluctuaciones del precio medio del mercado eléctrico registradas en 2025, asegurando que las ayudas se alineen con las directrices de la Unión Europea.



La resolución especifica que este nuevo parámetro es indispensable tanto para las nuevas solicitudes como para las renovaciones de certificados existentes. Finalmente, se detalla que el cumplimiento de este requisito debe demostrarse sobre los datos de consumo de los tres años anteriores al ejercicio actual.

El objetivo es mantener una intensidad económica constante El cálculo del cociente busca asegurar que los consumidores electrointensivos tengan una intensidad de uso de la electricidad mínima del 5%, en línea con las Directrices europeas sobre ayudas estatales.

Originalmente, el valor de referencia de 0,25 kWh/€ se estableció con los precios de 2022; sin embargo, dado que el cociente mide consumo físico (kWh) sobre valor añadido (€), las variaciones en el precio de la energía alteran el “esfuerzo” económico real que ese consumo representa.

Para neutralizar las fluctuaciones del mercado, el umbral se ajusta anualmente en función del precio medio del año anterior. La relación es inversa:

Al ser la electricidad más barata, una empresa necesita consumir más kilovatios por cada euro de valor añadido para alcanzar ese 5% de coste relativo. Por ejemplo, en 2024 el precio medio (76 €/MWh) fue un 31% inferior al de 2023, lo que provocó que el umbral se elevara hasta 0,67 kWh/€.

Al encarecerse la energía, se requiere menos consumo físico para alcanzar el mismo peso económico. En 2025, el precio medio subió a 83,18 €/MWh (frente a los 76 €/MWh de 2024), lo que resultó en una actualización del umbral a la baja, fijándose en 0,61 kWh/€.

Para realizar este ajuste, no solo se observa el precio base, sino el precio medio del mercado que incluye los mercados diario e intradiarios, los mercados de restricciones técnicas y desvíos, los servicios de ajuste y los pagos por capacidad.

## **Rentas de congestión para la financiación del proyecto de interconexión eléctrica entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya en el ejercicio 2024**

Resolución de 12 de enero de 2026, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen las rentas de congestión destinadas a la financiación del proyecto de interconexión eléctrica entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya en el ejercicio 2024.

El documento autoriza el uso de las rentas de congestión generadas por el intercambio energético para cubrir los costes de construcción asumidos por Red Eléctrica de España durante el ejercicio 2024.

Tras auditar las inversiones y descontar las subvenciones de la Unión Europea, el organismo fija una partida específica de aproximadamente 157,5 millones de euros. El texto detalla el marco legal y los antecedentes administrativos que permiten desviar estos excedentes del mercado hacia proyectos de infraestructura considerados singulares y estratégicos.

La disposición establece el procedimiento de pago y los mecanismos de recurso para asegurar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico nacional.

Las rentas de congestión La financiación del proyecto se realiza con cargo a las rentas de congestión generadas por la propia interconexión con Francia.

Siguiendo el Reglamento (UE) 2019/943, los ingresos de estas rentas tienen usos prioritarios, como garantizar la disponibilidad de capacidad o cubrir costes de inversiones para reducir la congestión.

Una vez cubiertos los objetivos prioritarios, las rentas se depositan en una cuenta específica en régimen de depósito gestionada por la CNMC, cuyo destino exclusivo es financiar esta interconexión.

La cantidad de rentas destinada al proyecto se establece anualmente a través de las resoluciones de peajes. Si se recauda más de lo previsto, el excedente reduce los peajes de acceso; si es menos, se financia con rentas de años futuros.

El proyecto ha sido declarado de "carácter singular", lo que implica condiciones especiales para asegurar la sostenibilidad económica del sistema. Así, se establece una estimación económica base de 1.463.750.000 euros. El valor con derecho a retribución por el sistema no puede superar 1,25 veces dicha estimación base, una vez descontadas las ayudas financieras (como los fondos CEF de la UE).

Existe un límite máximo de inversión que puede cargarse a los peajes (aproximadamente 861 millones de euros según la planificación vigente mencionada en la fuente), ajustado por factores de retardo retributivo.

Para que la empresa transportista (Red Eléctrica de España, REE) reciba los fondos, debe seguirse un estricto procedimiento de auditoría y aprobación. REE debe solicitar el pago presentando los costes incurridos (por ejemplo, los del ejercicio 2024). Las cifras deben

estar auditadas tanto financieramente como bajo los procedimientos regulatorios de la Circular 1/2015. A los costes presentados se les deben restar las subvenciones recibidas de organismos europeos.

La CNMC revisa los costes y excluye aquellos que no corresponden al objeto de la resolución singular (por ejemplo, costes de líneas no incluidas como la de Gátika-Azpeitia) o gastos financieros intercalarios, los cuales no son financiados con rentas de congestión.

Tras la verificación, la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC emite una resolución (como la del 12 de enero de 2026) estableciendo la cantidad exacta a pagar y autorizando la disposición de fondos de la cuenta de depósito para abonar a REE.

## **Modificación de procedimientos de operación eléctricos 3.1, 3.2 y 7.2 para la estabilización de la tensión en el sistema eléctrico peninsular español**

La Resolución de 19 de enero de 2026, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV), modifica los procedimientos de operación eléctricos 3.1, 3.2 y 7.2 para facilitar la estabilización de la tensión en el sistema eléctrico peninsular español.

Las modificaciones afectan específicamente a la programación, las restricciones técnicas y la regulación secundaria, integrando medidas que anteriormente eran solo temporales. El objetivo primordial es reforzar la seguridad del suministro ante el aumento de energías renovables asíncronas que impactan la estabilidad de la red peninsular.

Entre las acciones clave se incluyen el ajuste de plazos de comunicación para los participantes del mercado y la obligación de mantener rampas de potencia controladas.

Aunque estas normas tienen vocación de permanencia, la autoridad establece un periodo de seguimiento de un año para evaluar su impacto económico y técnico. De este modo, se busca equilibrar la eficiencia del mercado mayorista con la robustez necesaria para la transición energética actual.

### *Modificaciones en el Procedimiento de Operación 3.1*

El objetivo principal es garantizar que el Programa Diario Viable Provisional (PDVP) incluya una solución completa de restricciones técnicas tras el Programa Diario Base de Funcionamiento (PDBF), otorgando firmeza a los programas antes del tiempo real y evitando redespachos de última hora que desestabilicen la tensión.

Se reducen los plazos para ciertos procesos logísticos para permitir una gestión más ágil. El plazo para la publicación del PDBF se reduce de 30 a 15 minutos. Asimismo, el envío de nominaciones de programa se reduce de 20 a 10 minutos tras los resultados del mercado.

Se flexibiliza la hora de publicación del PDVP para asegurar que contenga la solución completa de restricciones, retrasando su límite si es necesario (hasta las 14:45 o más tarde bajo comunicación) para evitar soluciones parciales.

### *Modificaciones en el Procedimiento de Operación 3.2*

Se busca reducir el desequilibrio de energía en tiempo real y la necesidad de activar energías de balance, anticipando la resolución de problemas de reserva.

La programación de grupos térmicos por falta de reserva a subir se incorpora a la Fase 1 del proceso de restricciones del PDBF, en lugar de gestionarse en tiempo real como ocurría anteriormente.

Se especifica que los grupos térmicos programados por falta de reserva deben ofrecer toda su potencia disponible en los mercados de balance en los periodos donde tengan una limitación de programa mínimo por seguridad.

Se elimina la posibilidad de soluciones parciales de restricciones, obligando a que la solución del PDBF sea siempre completa.

### *Modificaciones en el Procedimiento de Operación 7.2*

Esta medida es clave para controlar la velocidad de los cambios de potencia (rampas) que afectan a la tensión.

Se extiende la obligación de seguir el Programa de Tiempo Real (PTR) a todos los periodos de programación para los proveedores habilitados en el servicio de recuperación de frecuencia (aFRR), independientemente de si están participando activamente en el servicio en ese momento. Esto garantiza que un mayor número de instalaciones apliquen una rampa controlada en sus cambios de programa, evitando saltos bruscos de potencia que generen inestabilidad de tensión.

También, se adapta el cálculo de desvíos para que sea compatible con este requisito, considerando la integral del PTR rampeado.

Adicionalmente, se establece un mandato al operador del sistema para elaborar un plan de actuación que incluya la revisión de los criterios de seguridad para incorporar la variabilidad de las tensiones y la correcta configuración de estabilizadores de potencia (Power System Stabilizers).

## **Nueva Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea**

El Reglamento (UE) 2026/150 del Consejo, de 16 de enero de 2026, publicado en el DOUE de 19 de enero, modifica el Reglamento (UE) 2021/1173 por el que se crea la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea.

Estas instalaciones de gran escala buscan impulsar el desarrollo de modelos avanzados de IA y mejorar la competitividad científica e industrial del continente frente a potencias globales.

La legislación modifica normativas previas para integrar pilares estratégicos dedicados a la computación cuántica y la supercomputación de alto rendimiento, asegurando la soberanía tecnológica de la Unión. Se establecen mecanismos de financiación conjunta entre la Comisión Europea y los Estados miembros, permitiendo incluso el uso de fondos de recuperación para estas inversiones.

Además, el texto define criterios estrictos de gobernanza y seguridad estratégica para proteger los activos digitales y fomentar un ecosistema de innovación accesible para pequeñas empresas y centros de investigación.

El objetivo final es consolidar una red de infraestructuras interconectadas que garantice el liderazgo europeo en la transición digital y la autonomía científica.

La UE reconoce que los grandes modelos de IA de uso general son motores vitales de la innovación y la productividad. Para liderar en este campo, las gigafactorías de IA se definen como instalaciones a gran escala capaces de gestionar todo el ciclo de vida de los modelos de IA, desde su desarrollo hasta la inferencia a gran escala.

Estas instalaciones deben ofrecer una capacidad informática considerablemente superior a la actual, estimándose que la próxima generación de modelos requerirá instalaciones con una cantidad de procesadores de IA entre tres y cuatro veces superior a las factorías de IA más potentes existentes.

El despliegue de estas gigafactorías es un pilar fundamental del Plan de Acción «Continente de IA» para situar a la Unión como líder mundial. El objetivo es reducir dependencias externas y asegurar la cadena de suministro europea mediante:

- El diseño conjunto de superordenadores de primera categoría preservando la seguridad de la cadena de suministro.
- La garantía de que las infraestructuras respalden la autonomía estratégica y la resiliencia económica de Europa.
- La protección de los intereses de seguridad de la Unión, restringiendo o excluyendo la participación de entidades de terceros países si contravienen los intereses estratégicos o de seguridad de la UE.

Para democratizar el acceso a la tecnología punta, la UE busca que estas infraestructuras beneficien no solo a investigadores, sino también a la industria y al sector público:

- Se proporcionará acceso a infraestructuras de supercomputación de primera categoría a pequeñas y medianas empresas (pymes), empresas emergentes (startups) y empresas en expansión (scale-ups).
- El tiempo de acceso de la Unión a estas gigafactorías se utilizará prioritariamente para permitir que estas empresas realicen actividades de investigación e innovación.
- Se fomentará el desarrollo de modelos fundacionales y nuevas soluciones de IA en todos los sectores.

#### *Fomento de modelos abiertos y excelencia científica*

Para acelerar la innovación compartida, se prevé el uso de estas instalaciones para proyectos europeos que desarrollen modelos abiertos de IA de frontera. Estos modelos se seleccionarán mediante concurso público y se pondrán a disposición de las autoridades públicas y las comunidades científica y empresarial de toda Europa, actuando como motores de innovación.

#### *Financiación y colaboración público-privada*

La UE articula este liderazgo a través de la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea (EuroHPC), modificando su reglamento para permitir la adquisición y explotación conjunta de estas gigafactorías. El modelo financiero incluye una contribución de la Unión que cubre hasta el 17% de los gastos de capital (CAPEX) de la in-

fraestructura o una compra garantizada de tiempo de acceso; la movilización de fondos nacionales, incluidos los del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), para complementar la inversión; y la creación de consorcios que incluyan proveedores de infraestructura tecnológica y entidades de los Estados miembros.

### *Integración en un ecosistema hiperconectado*

La estrategia no se limita a instalaciones aisladas, sino que busca crear una red federada e hiperconectada. Las gigafactorías podrán ser multiemplazamiento (conectadas con redes de muy alta velocidad) y se integrarán con la red EuroHPC de factorías de IA para garantizar un intercambio de conocimientos sin fisuras en todo el ecosistema europeo.

Además, se otorgará un 'sello EuroHPC' a infraestructuras nacionales que cumplan ciertos estándares para federarlas con la red europea.

## JURISPRUDENCIA

### **Es contraria al Derecho de la UE la norma de exención IVA de prestaciones por servicios a miembros por agrupaciones de personas con actividad exenta**

Agrupació de Neteja Sanitària («ANS») es una agrupación de interés económico (A. I. E.) cuya finalidad es crear una infraestructura común para la prestación del servicio de limpieza integral en hospitales, centros y edificios en general en los que los socios de ANS desarrollan su actividad sanitaria y sociosanitaria (asunto C-379/24).

Educat Serveis Auxiliars, («Educat») está constituida como sociedad cooperativa catalana limitada (S. C. C. L.). Su finalidad es crear una infraestructura común para la prestación del servicio de limpieza integral en los establecimientos e instalaciones de los socios de Educat en los que estos desarrollan su actividad educativa -en infantil, primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional (asunto C-380/24). ANS y Educat celebraron con terceros sendos contratos relativos a la gestión del personal que empleaban. El recurso

a la subcontratación para la actividad de limpieza se justificaba sobre la base de que los terceros tenían la experiencia, los conocimientos y los recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de los servicios de limpieza que ANS y Educat prestaban a sus miembros.

A raíz de sendas inspecciones tributarias, la Administración Tributaria sometió al IVA las operaciones que Educat y ANS realizaban al prestar servicios de limpieza a sus respectivos socios.

Se consideró que no era aplicable la exención prevista en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido porque ANS y Educat no habían prestado directamente esos servicios, sino que habían recurrido a empresas externas que habían prestado una parte esencial de los mismos.

Por otro lado, las inspecciones pusieron de manifiesto que los servicios de limpieza no estaban vinculados directa y exclusivamente a la actividad exenta ejercida por los respectivos miembros de ANS y de Educat, como exige la normativa española, por lo que la exención podía provocar distorsiones de la competencia.



El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña confirmó las dos decisiones de liquidación del IVA. ANS y Educat recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Alegan que la exención del IVA no puede denegarse por el hecho de que la gestión del personal se haya subcontratado a una empresa tercera, pues ello es conforme con el espíritu y la finalidad de esa exención.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió dirigirse con carácter prejudicial al Tribunal de Justicia. Se pregunta si la normativa española es conforme con la Directiva relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Esta exime las prestaciones de servicios realizadas por agrupaciones autónomas de personas que ejerzan una actividad exenta, o para la cual no tengan la cualidad de sujeto pasivo, con objeto de proporcionar a los miembros de esas agrupaciones los servicios directamente necesarios para el ejercicio de esa actividad, siempre que las agrupaciones se limiten a exigir a sus miembros el reembolso exacto de la parte que les incumba en los gastos hechos en común. La exención está supeditada a la condición de no ser susceptible de provocar distorsiones de la competencia.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara, en primer lugar, que la Directiva se opone a una normativa nacional según la cual las prestaciones de servicios realizadas por una agrupación autónoma de personas no pueden calificarse de servicios «directamente necesarios» cuando dichas prestaciones son necesarias para la actividad exenta del impuesto sobre el valor añadido ejercida por esas personas, pero no están vinculadas exclusivamente a esta actividad debido a su carácter general.

El Tribunal de Justicia señala que la Directiva del IVA se refiere a prestaciones de servicios que, por una parte, se realicen en beneficio de sus miembros por agrupaciones autónomas de personas que ejerzan una actividad exenta o para la cual no tengan la cualidad de sujeto pasivo y, por otra parte, tengan por objeto servicios «directamente necesarios» para esa actividad.

Si bien la Directiva exige una relación entre la prestación de servicios realizada por la agrupación autónoma de personas y la actividad exenta de sus miembros, no exige que se trate de servicios específicos que constituyan una aportación indispensable para esa actividad o para una operación concreta. En efecto, basta con que la prestación de servicios efectuada por la agrupación sea directamente necesaria para el ejercicio de la actividad exenta de sus miembros.

Destaca que esas prestaciones de servicios no figuran entre las que han de ser indispensables para las operaciones exentas con el fin de gozar de la exención. Por lo tanto, no cabe considerar que esas prestaciones sean específicas hasta el punto de constituir una aportación indispensable para la actividad exenta, o para algunas de las operaciones exentas.

En cambio, no pueden estar comprendidas en la exención las prestaciones de servicios que no contribuyan directamente al ejercicio de actividades de interés general previstas en la Directiva, sino al ejercicio de otras actividades.

Por otra parte, la Directiva pretende eximir del IVA determinadas actividades de interés general con el fin de facilitar el acceso a determinadas prestaciones y el suministro de determinados bienes, evitando los costes adicionales que se derivarían en caso de estar sujetas a dicho impuesto.

Por tanto, dicha exención se aplica a las prestaciones de servicios efectuadas por una agrupación autónoma de personas cuando dichas prestaciones contribuyen directamente al ejercicio de actividades de interés general establecidas en la Directiva. Este es el caso cuando los servicios se prestan habitualmente por una agrupación de este tipo a sus miembros en la medida en que son necesarios para el ejercicio de la actividad exenta.

A este respecto, servicios «generales» como la limpieza podrían considerarse directamente necesarios tanto para el sector de la asistencia sanitaria como para el de la educación, sectores en los que, además, existen requisitos específicos en materia de higiene para los operadores. Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña precisa que los servicios de limpieza de que se trata son singulares, técnicos y complejos en relación con las actividades en cuestión.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva se opone a una interpretación de una normativa nacional según la cual existe, por principio, una distorsión de la competencia o un riesgo de distorsión de la competencia cuando los servicios prestados por una agrupación autónoma de personas en favor de sus miembros pueden, por su carácter general, utilizarse para cualquier actividad imponible y no exclusivamente para la actividad exenta que ejercen

Según la normativa española, la exención del IVA prevista en la Directiva del IVA está supeditada al requisito de que los servicios prestados directamente a los miembros de agrupaciones autónomas de personas constituidas por personas que ejerzan una actividad exenta o no sujeta al impuesto que no origine el derecho a la deducción se utilicen directa y exclusivamente en dicha actividad y sean necesarios para el ejercicio de la misma.

El Tribunal de Justicia indica que de su primera respuesta resulta que la Directiva se opone a una normativa nacional según la cual las prestaciones de servicios realizadas por una agrupación autónoma de personas no pueden calificarse de servicios «directamente necesarios» cuando son necesarias para la actividad exenta del IVA ejercida por esas personas, pero no están vinculadas exclusivamente a esta actividad debido a su carácter general.

El Gobierno español alegaba que la norma europea no se opone a la exigencia de exclusividad impuesta por la normativa española, dado que la finalidad de esta última es garantizar que el requisito relativo a la inexistencia de distorsiones de la competencia previsto en la Directiva del IVA pueda ser aplicado sencilla y correctamente.

El Tribunal de Justicia subraya que las condiciones a los que los Estados miembros sometan las exenciones no pueden afectar a la definición del contenido de las exenciones previstas por la Directiva. Según el Tribunal de Justicia, este es precisamente el efecto de la normativa española, mediante la que el legislador nacional pretende excluir todos los servicios prestados por agrupaciones autónomas de personas que también puedan utilizarse para actividades no relacionadas exclusivamente con la actividad exenta que ejercen los miembros de dichas agrupaciones.

El Tribunal de Justicia recuerda que la finalidad de la exención es evitar que la persona que ofrezca determinados servicios quede sujeta al pago del IVA cuando se ha visto obligada a colaborar con otros profesionales a través de una

estructura común que se hace cargo de las actividades necesarias para poder realizar dichos servicios. Por lo tanto, como se ha dicho, exime del IVA determinadas actividades de interés general con el fin de facilitar el acceso a determinadas prestaciones y el suministro de determinados bienes, evitando los costes adicionales que se derivarían de su sujeción a dicho impuesto.

Denegar a una agrupación autónoma de personas que cumpla todos los requisitos establecidos en la Directiva del IVA la mencionada exención por el mero hecho de que la prestación de servicios realizada a los miembros de esa agrupación sea una prestación de servicios de carácter general que también puede realizarse a otras personas limitaría

el ámbito de aplicación de la Directiva, excluyendo, por principio, de la exención del IVA las prestaciones realizadas por esa agrupación a sus miembros, cuando esa limitación no responde a la finalidad de la Directiva.

## **El Pleno del TC desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Baleares contra la Ley por el Derecho a la Vivienda**

El Pleno del Tribunal Constitucional, en una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Laura Díez Bueso, ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de las Illes Balears contra la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Se trata de la tercera de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en relación con la citada Ley 12/2023, tras las SSTC 79/2024, de 21 de mayo (ver nota de prensa nº 52/2024), y 26/2025, de 29 de enero (ver nota de prensa nº8/2025), por lo que aborda el análisis de cuestiones todavía no tratadas en las mismas.

a) En primer lugar, la sentencia aborda la impugnación del art. 15.1 a) de la Ley 12/2023, en virtud de la cual se habilita a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística a (i) establecer la construcción de vivienda dotacional pública como un uso compatible del suelo dotacional, y (ii) a obtener suelo, con cargo a las actuaciones de transformación urbanística, para destinarlo a vivienda social o dotacional, en los términos que establezca la legislación de ordenación territorial y urbanística.

La sentencia considera que este precepto se encuentra amparado por el art. 149.1.13 CE que atribuye al Estado competencia sobre las “bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”. Así, el TC constata que se trata de una regulación que persigue el objetivo de incrementar la oferta de vivienda social o dotacional a través del fomento de la construcción de viviendas públicas y que dicho objetivo se articula a través de unas directrices o criterios de ordenación del sector de la construcción de vivienda que, en caso de activarse, tendrían una repercusión significativa sobre la actividad económica general.

Además, la legislación estatal no deja vacías de contenido las competencias autonómicas sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, pues el legislador autonómico sigue disponiendo de un amplio margen de maniobra para configurar el modelo de urbanismo de la comunidad autónoma.

b) Por otro lado, se desestima la queja dirigida contra el art. 35, que establece el deber de las comunidades autónomas de suministrar al Estado determinada información en relación con los programas de acceso a la vivienda. Esta previsión se considera constitucional, pues se trata de información sobre políticas públicas en materia de vivienda que el Estado viene obligado a publicar anualmente y de la que necesita disponer para el mejor ejercicio de su competencia sobre la ordenación general de la economía (art. 149.1.13 CE). Este deber de información, además, se incardina con en el marco de las relaciones de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas.

c) También se declara la constitucionalidad de la nueva redacción dada a los apartados a) y b) del art. 439.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que establecen determinados requisitos de admisión de las demandas de recuperación posesoria.

En primer lugar, la sentencia considera que se trata de una norma de naturaleza procesal, dictada por el Estado en el ejercicio de su competencia exclusiva sobre legislación procesal (art. 149.1.6 CE).

En segundo lugar, se descarta que esta previsión vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). La sentencia considera que, en este tipo de procedimientos, no constituyen obstáculos que impidan o dificulten de manera desproporcionada el acceso a la jurisdicción el exigir al demandante que indique si el inmueble litigioso constituye la vivienda habitual de la persona ocupante y que aporte certificación del Registro de la Propiedad si no tiene la condición de gran tenedor.

d) Finalmente, se desestima la queja dirigida contra el art. 441.5 de la LEC, que obliga al órgano judicial a realizar una serie de comunicaciones a la administración competente en materia de vivienda y asistencia social, en los procesos de recuperación posesoria. Este precepto se incardina en la competencia estatal sobre legislación procesal (art. 149.1.6 CE).

La sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y José María Macías Castaño

**El TSJ de Extremadura confirma el despido disciplinario de un técnico de ambulancias tras abandonar un servicio de urgencias**

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha confirmado la procedencia del despido disciplinario de un técnico del servicio de ambulancias del SES tras abandonar su puesto en una ambulancia de urgencias durante una guardia en la localidad de Fregenal de la Sierra (Badajoz).

La Sala desestima así el recurso del trabajador y declara procedente el despido de esta persona que prestaba sus servicios en la empresa Ambuvital Transporte Sanitario S.L.

El conflicto se inició en enero de 2023, cuando la empresa comunicó al trabajador su intención de trasladarlo del servicio de urgencias al servicio programado para ajustarse a su petición de limitar la jornada anual a 1.800 horas.

El trabajador entendió esta medida como una modificación sustancial de sus condiciones laborales y anunció su intención de extinguir el contrato con indemnización. La empresa rectificó pocos días después, dejando sin efecto la modificación antes de su entrada en vigor.

Meses más tarde surgió un nuevo desencuentro. En mayo de 2023, el trabajador solicitó disfrutar un día de asuntos propios el 3 de junio, permiso que la empresa denegó por imposibilidad de cubrir el servicio. Pese a repetir la negativa y advertirle expresamente de la obligación de permanecer en su puesto hasta la finalización de la guardia, señala la sentencia, el trabajador abandonó el servicio el 3 de junio, dejando la ambulancia aparcada frente al Centro de Salud de Fregenal de la Sierra con las llaves colocadas en una de las ruedas.

## **Condenados los dos empleados públicos de GESVICAN que cobraban por elaborar proyectos para empresas aspirantes a concursos de Obras Públicas**

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado hoy a dos empleados públicos de la empresa GESVICAN que cobraban por elaborar proyectos para empresas aspirantes a concursos de la Consejería de Obras Públicas a sendas multas de 2.421 euros y a una pena de inhabilitación durante dos años para empleo público que conlleve la realización de baremaciones de proyectos de contratación pública.

En una vista celebrada hoy ante el magistrado presidente del tribunal del jurado para la ratificación del acuerdo al que todas las partes llegaron en fase de instrucción, también han sido condenados tres responsables de las empresas SENOR y RUCECAN, que pagaron a los primeros por sus servicios y cuyas empresas resultaron elegidas en régimen de UTE para actuaciones de mejora de tres carreteras autonómicas.

Los dos representantes de RUCECAN deberán pagar cada uno una multa de 1.620 euros, mientras que para el representante de SENOR la sanción es de 1.350 euros.

Además, se acuerda el pago de una indemnización al Gobierno de Cantabria de 53.000 euros, cantidad que todos ellos ya han consignado judicialmente para hacer frente a su responsabilidad civil.

El magistrado, que ha declarado la firmeza de la sentencia, ha anunciado que esta se ajustará a los términos del acuerdo, que considera a los primeros autores y a los tres restantes cooperadores necesarios de un delito continuado de actividad prohibida a funcionario público.

Concurren en todos los casos las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de confesión y de reparación del daño.

#### Hechos delictivos

Según los hechos que se recogen en el escrito de conformidad que todas las partes han firmado y que se llevarán a sentencia, los trabajadores de GESVICAN eran titulados superiores en ingeniería de caminos, canales y puertos, y se encargaban de puntuar conforme a baremos y a clasificar las ofertas que se presentaban a concursos de Obras Públicas.

Así las cosas, los dos acusados "se concertaron con distintas sociedades que operaban habitualmente en el sector de obra pública para revisar o elaborar técnicas de las ofertas, solicitando a cambio precios con distintas cantidades económicas según su actuación, trabajando por tanto para ellos indebidamente, en cuanto que alteraban la libre concurrencia de partícipes en la contratación pública".

Las tarifas que cobraban los dos empleados públicos ascendían a 2.500 euros por la elaboración de condiciones técnicas y calidad; 2.000 euros si la técnica colocaba a la empresa en la primera posición, y 5.000 euros si resultaba adjudicada.

Esta dinámica se produjo en tres ocasiones en el año 2019 con los proyectos de mejora del trazado de tres carreteras autonómicas: la CA-152 de La Escriba a La Matanza; la CA-271 de Castillo Pedroso a San Vicente de Toranzo; y la CA-440 entre Loredó y Langre.



En los tres casos, los dos empleados públicos fueron asignados para el estudio de las ofertas y “aprovechando dicho encargo”, se concertaron con los responsables de RUCECAN y SENOR para que se presentasen en régimen de UTE “y, previo abono de las cantidades señaladas anteriormente al cincuenta por ciento entre ambas, pudieran obtener de forma más eficaz la concesión de dichos contratos, como ocurrió efectivamente”.

Así, uno de los acusados, encargado de GESVICAN para la elaboración de proyectos y análisis de condiciones técnicas y de calidad, “con el auxilio puntual” del otro trabajador, “se dedicó a preparar para las empresas los estudios técnicos de sus licitaciones”.

De este modo, alteró “la libre concurrencia entre competidores, quebrantando sus deberes inherentes al cargo de forma reiterada a cambio de precio por la prestación de sus trabajos”.

No se puede determinar la cantidad exacta que los empleados públicos percibieron en metálico, pero se considera probado que “cuando menos” recibieron 53.000 euros, tal y como se desprende de las anotaciones recogidas en los registros practicados.

Se declara probado que se ha producido un perjuicio para las arcas del Gobierno de Cantabria, ya que “ha afectado a la cuantía de las ofertas por las que se adjudicaron los contratos y probablemente también haya sido trasladado a una ejecución minorada de la cantidad de las obras públicas”.

Ese es el motivo por el que la sentencia les condena a indemnizar con 53.000 euros al Gobierno de Cantabria y a pagar las costas de la acusación particular, que ha ejercido el ejecutivo autonómico.

## **Confirmada la condena al maquinista del Alvia que descarriló en Angrois y absuelve al exdirector de Seguridad en la Circulación de ADIF**

La Audiencia Provincial de A Coruña confirma la pena de dos años y seis meses de cárcel impuesta al maquinista del tren Alvia que descarriló en la curva de Angrois el 24 de julio de 2013 al considerarlo autor de 79 delitos de homicidio y 143 delitos de lesiones, todos ellos por imprudencia grave.

Al que era director de Seguridad en la Circulación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en el momento de la puesta en funcionamiento de la línea, la Sala lo absuelve de los mismos delitos, por los que había sido condenado a la misma pena que el maquinista.



Por lo tanto, el tribunal revoca parcialmente la sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela y estima los recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal, ADIF, su aseguradora (AGCS) y el exalto cargo de la entidad.

La Audiencia Provincial confirma la responsabilidad civil de RENFE y del maquinista, por lo que la aseguradora, QBE, deberá hacer frente a las indemnizaciones en las cuantías fijadas en la sentencia, que ascienden -las que están especificadas- a más de 22 millones de euros, de los cuales alrededor de 12 millones corresponden a familiares de los fallecidos y, 10, a las personas que sufrieron lesiones.

La sala estima las peticiones de las víctimas que recurrieron la sentencia de primera instancia, contra la que se interpusieron un total de 108 recursos, a los que hay que sumar las partes que se adhirieron a ellos. Por ello, incrementa las indemnizaciones establecidas en dicho fallo.

Así, respecto a las personas fallecidas, tiene en cuenta la reforma del año 2015 del baremo que se utiliza en los accidentes de tráfico, por lo que amplía el número de familiares que tienen derecho a ser indemnizados. Y, en cuanto a las personas que sufrieron lesiones, no ha rebajado en ningún caso las cantidades que en su día consignó QBE. De hecho, en la mayoría de los casos, las incrementa.

La Audiencia Provincial ha notificado hoy la sentencia, que tiene 268 páginas y que cuenta con un voto particular. En el fallo, la sala concluye que el maquinista cometió una imprudencia temeraria, es decir, grave, al infringir su obligación de prestar atención a la conducción “por mantener una llamada totalmente innecesaria que le distrajo de su fundamental obligación de adecuar la velocidad al tramo de vía en el que se encontraba”. Así, recalca que “ni atendió la documentación en cabina ni prestó atención a la vía, siendo múltiples las señales de carácter visual y acústico que desatendió de forma continuada”.

En la resolución, también subraya que, en el recurso presentado por el maquinista, ni tan siquiera discute “que al mando del tren a una velocidad de 200 km/h mantenía una conversación telefónica que le llevó a incumplir la obligación que conocía de reducir la velocidad a 80 km/h en el tramo en el que se produce, por dicho exceso de velocidad, el descarrilamiento”.

Las magistradas, además, destacan que “se siguió la normativa técnica común de toda la red ferroviaria española, pues era una reducción escalonada de velocidad propia de la llegada a estaciones”, así como que el recurrente “no activó el sistema de frenado del tren hasta que vio la curva y/o cesó la llamada”. También señalan que, al tiempo que mantenía la conversación telefónica, accionó “varias veces el pedal de hombre muerto”, lo que impidió que se activase el freno de emergencia.

La sala, por lo tanto, descarta que se vulnerase la presunción de inocencia del condenado y el principio in dubio pro reo, motivos alegados en el recurso, pues entiende que concurre prueba de cargo de las infracciones penales y de su participación en ellas.

De esta forma, concluye que no existió déficit de formación ni infracción en la señalización existente, tal y como defiende el maquinista. En cuanto a la desconexión del ERTMS embarcado en el tren, afirma, al igual que la jueza de primera instancia, que no tuvo incidencia causal.

“Lo que resulta claro es que ni el día del accidente ni en ningún momento desde la puesta en funcionamiento de la línea existió ERTMS en ese tramo, ni baliza que frenara el tren para el caso de que el recurrente no lo hiciera, y estas circunstancias le eran sobradamente conocidas, por lo que ninguna exclusión ni degradación de su imprudencia se advierte como posible”.

Por lo tanto, la Audiencia Provincial rechaza la solicitud del maquinista y de la aseguradora, de forma subsidiaria, de que la imprudencia merezca el calificativo de leve debido “a la gravedad de la infracción de la norma de cuidado y el grado de peligrosidad de la conducta”.

La sala también se opone a tener en cuenta la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas para rebajar la condena. En ese sentido, recuerda que “no puede aceptarse que la interposición de recursos o la práctica de diligencias o de actuaciones sumariales a petición de las partes cause una dilación que deba calificarse como indebida”. Y, en cuanto a la invocación de la atenuante de confesión, manifiesta que el recurrente “reconoció lo evidente, el descarrilamiento por su desatención en la conducción, pero tratando también de eludir su responsabilidad”. En ese sentido, hace referencia a que omitió la existencia de la llamada telefónica.

Las juezas también desestiman la concurrencia de la atenuante de reparación del daño, pues señalan que “las únicas entregas recibidas por las víctimas por las consignaciones efectuadas por la aseguradora no han supuesto esfuerzo alguno para el acusado, que ningún pago dentro de sus posibilidades ha realizado”. A ello añaden que la actuación de QBE “no puede calificarse de pronta ni eficaz en la reparación de las víctimas”.

## Absolución

La Audiencia Provincial concluye que no puede atribuirse responsabilidad penal al que fue director de Seguridad en la Circulación de ADIF por los resultados lesivos y mortales del accidente. En la sentencia afirma que la prueba practicada no permite concluir que existiera una acción concreta que el recurrente estuviera obligado a realizar y que omitiera.

Añade, además, que tampoco se ha demostrado que el descarrilamiento se hubiera evitado con una probabilidad cercana a la certeza de haberse hecho la evaluación supuestamente omitida: analizar el riesgo de exceso de velocidad en un tramo donde no actuaba el sistema automático que frena el tren (ERTMS) y en el que solo funcionaba un sistema que se limita a avisar al maquinista (ASFA).

Igualmente, señala que “no se acreditó con la debida certeza que su ámbito funcional lo situara en una posición de garante específica respecto al riesgo que se produjo y determinó los resultados”. Por ello, incide en que “no cabe afirmar que el haber, supuestamente, omitido realizar las acciones descritas sea equiparable a provocar el resultado en el sentido de afirmar que lesionó o mató imprudentemente”.

El tribunal subraya que, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, la responsabilidad penal por comisión por omisión solo es posible cuando se acredita que el garante pudo impedir el resultado y percibió el curso causal que condujo a él, siquiera como estimable.

Así, indica que, si bien es “lógico” que, tras producirse el accidente, “se tengan más datos y se modifiquen incluso los criterios de valoración, normalmente para hacerlos más rigurosos”, dicho juicio no puede determinar la responsabilidad penal de quien actuó con la información disponible en aquel momento.

Las magistradas resaltan que “ninguna advertencia, ni general ni específica, llegó al recurrente del riesgo de accidente que supusiera la curva y el cambio de velocidad en el tramo donde se produjo, cuya seguridad en esos extremos había sido certificada por otros responsables en un ámbito en el que la complejidad impone la división del sistema ferroviario en distintos subsistemas”.

Con la información existente entonces, la aplicación de los principios de aceptación del riesgo previstos en la normativa nacional y europea no habría conllevado, según la sentencia, a la adopción de medidas distintas de las que se implantaron.

Asimismo, el fallo concluye que el recurrente “no tuvo intervención ni capacidad de decisión” en aspectos clave como la modificación del proyecto original y el que finalmente se acometió, la dotación o no de ERTMS (sistema que supervisa continuamente la velocidad del tren y puede frenar automáticamente si se supera el límite permitido) en la línea o en el tramo concreto del descarrilamiento, la ubicación del punto de transición entre sistemas ERTMS y ASFA, la configuración del CVM de la línea donde se reflejó el cambio de velocidad de tramo donde se produjo el descarrilamiento, ni en el desarrollo del sistema ASFA, “que se utiliza en España con carácter general en la red ferroviaria”, ni tampoco sobre la actuación del personal de conducción.

La Audiencia considera probado que el exdirector de Seguridad en la Circulación de ADIF obró de acuerdo con los estándares establecidos para la puesta en servicio de nuevas líneas, por lo que incide en “la ausencia de base probatoria suficiente ni concluyente para mantener que el condenado debiera haber realizado otra evaluación de riesgos específica sobre el punto concreto de la línea, ni tampoco una integral o completa de todos los subsistemas, que no estaba prevista ni en la normativa nacional ni comunitaria aplicable”.

La sentencia es firme, pues no cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, atendiendo a la fecha de incoación del procedimiento.

#### Voto particular

Una de las magistradas ha emitido un voto particular en el que manifiesta su discrepancia con la absolución del exdirector general de Seguridad en la Circulación de ADIF. La jueza entiende que la sentencia de primera instancia, “de forma congruente, detallada y motivada”, explicita los motivos en los que basa la condena y que “en modo alguno resultan rebatidos por los recursos presentados”. Así, recalca que “existía una obligación de valorar correctamente el riesgo y no se hizo”, al tiempo que destaca que en el tramo del accidente “el riesgo fue conscientemente trasladado en su integridad al maquinista”.

La magistrada incide en que el acusado “asumía una posición de garante, pudiendo haber efectuado una correcta valoración del riesgo y adoptado medidas para eliminarlo”. La prueba practicada, según entiende la jueza, pone de relieve “la clara responsabilidad del acusado”, pues señala que, “era exigible llevar a cabo una evaluación de riesgos completa de la línea antes de su puesta en servicio”.

Además, afirma que, con las decisiones y resoluciones acordadas por el acusado, “se produjo un progresivo deterioro de la seguridad de la línea, lo que comportó un incremento de riesgo”, al tiempo que destaca que el análisis de riesgos específico del enclavamiento de Santiago no fue encomendado ni contratado por ADIF con INECO, ni con ninguna otra entidad. En el voto particular, también afirma que “el lugar de ubicación de la curva resultaba claramente peligroso y relevante, encontrándose en la fecha del accidente sin ningún tipo de protección”.

La magistrada indica que el acusado firmó la certificación de seguridad el 7 de diciembre de 2011 “sin haber verificado el cumplimiento de las condiciones exigibles en materia de seguridad” y señala que también autorizó la desconexión del ERTMS. “Se ha demostrado que normativamente era exigible, y se omitió por el acusado la valoración del riesgo y que, si el riesgo hubiese sido valorado, podría haberse eliminado”, concluye la magistrada en su voto particular.

## **El TSJ de Murcia obliga a la Junta Arbitral de Transportes a tramitar una reclamación que inadmitió**

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha estimado la demanda de nulidad interpuesta por la parte demandante frente a un laudo dictado por la Junta Arbitral del Transporte de la Región de Murcia, al apreciar que aplicó de forma incorrecta la normativa reguladora del arbitraje en materia de transporte, dejado indebidamente de conocer al inadmitir una reclamación que sí estaba dentro de su ámbito de atribuciones, incurriendo en una infracción del orden público procesal.

La resolución judicial analiza un procedimiento arbitral en el que la parte reclamante solicitaba el pago de 4.598 euros por el presunto incumplimiento de un contrato de transporte de limones a Polonia, mientras que la parte reclamada opuso una pretensión económica superior a 15.000 euros, oponiendo una reclamación por daños en la mercancía por el retraso en la entrega.

La Junta Arbitral inadmitió la reclamación principal por no constar acuerdo de sometimiento arbitral expreso y considerar que tampoco se podía presumir su existencia puesto “que la cuantía de los daños que opone la contraparte es superior a 15.000 euros”, decisión que la Sala considera contraria a lo dispuesto en el artículo 38.1 de Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

La sentencia razona que “la Junta Arbitral aplicó erróneamente la normativa al rechazar el conocimiento de la controversia, con el resultado de infracción del orden público procesal”, subrayando que el límite cuantitativo previsto en la legislación sectorial debe operar respecto de cada una de las pretensiones formuladas, sin impedir que se conozca de aquella que sí se encuentra dentro de su ámbito legal de atribuciones.

La Sala destaca que la Junta Arbitral, ante una pretensión formulada por la parte reclamada que excedía del límite económico legal, “estaba obligada a no admitir la pretensión/alegación formulada por la mercantil reclamada”, pero ello “no debió implicar que declinara el conocimiento respecto de la pretensión inicial que, esta sí, caía dentro de su ámbito de atribución legal”.

En este sentido, la resolución enfatiza que la actuación de la Junta “frustra las legítimas expectativas de la mercantil reclamante de obtener una respuesta a su pretensión por la vía y ante la instancia señalada por nuestro Ordenamiento Jurídico para resolverla con carácter vinculante para todos”, lo que determina la nulidad del laudo por vulneración de normas imperativas.

Como consecuencia de ello, el Tribunal declara la nulidad del laudo arbitral impugnado y acuerda la retroacción de las actuaciones “al momento del acto de la vista a fin de que la Junta Arbitral dé curso y resuelva las cuestiones planteadas por la reclamante en el procedimiento arbitral”, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales. La sentencia es firme y contra la misma no cabe recurso.

## **Admite nueve meses de prisión por increpar a una mujer que hacía topless y referirse en tono peyorativo a su procedencia extranjera**

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado hoy a nueve meses de prisión a una mujer que increpó a otra mujer que se encontraba en la playa haciendo topless y se refirió en tono peyorativo a su procedencia extranjera.

En una audiencia preliminar celebrada esta mañana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, la acusada ha reconocido los hechos y ha admitido ser autora de un delito de odio y discriminación en concurso con un delito contra la integridad moral, con la concurrencia de la circunstancia agravante de actuar con ánimo discriminatorio.

Además de la pena de prisión, la mujer ha sido inhabilitada para profesión u oficio educativo durante cuatro años, y condenada al pago de una multa de 2.400 euros y de una indemnización a la perjudicada de 500 euros.

Dado que carece de antecedentes penales, el tribunal ha decidido suspender la pena de prisión durante un periodo de dos años, siempre y cuando indemnice a la víctima.

Según los hechos que recoge el escrito de calificación de la fiscalía y que se han llevado a sentencia, encontrándose ambas de la playa de La Concha de Santander, la acusada dijo en voz alta: “Esta está para que la meen en las tetas”, y después se le acercó y “de muy malos modos” le dijo que se tapara. Al negarse la mujer, la acusada le amenazó con agredirla y se marchó.

Tiempo después, la acusada regresó para reiterar su exigencia y al comprobar en el acento que la mujer no era española, “con ánimo de humillarle y alterar su estado anímico, le espetó en voz alta: Ya sabemos a lo que venís las extranjeras”.

A continuación, le dijo: “Seguro que tú tendrás una casa, que yo tengo ocho hijos y pago un alquiler”, y después “le amenazó con hacer unas fotos de sus tetas y subirlas a Instagram”.

Personada la policía local a petición de la mujer que fue increpada, la acusada reiteró en su presencia su desacuerdo con el topless de la mujer y que como era extranjera “todos sabemos lo que hacen los extranjeros”, o “que como venían de donde venían...”.

La sentencia añade que las expresiones utilizadas por la acusada para referirse con carácter peyorativo a la procedencia de la mujer, el tono elevado y el escenario donde las pronunció (una playa atestada de público) captando la atención de varias personas que se encontraban en las inmediaciones, provocaron en la víctima sentimientos de humillación y de desprecio hacia sí misma en menoscabo de su dignidad.

## **La jueza rechaza incluir a dos personas fallecidas como víctimas mortales en la causa sobre la gestión de la DANA de Valencia**

La titular de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, que investiga la gestión de la DANA que asoló la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, ha rechazado en sendos autos incluir en la causa a dos personas fallecidas, un hombre y una mujer, como nuevas víctimas mortales de la catástrofe.

La instructora ha denegado así, en sendos autos notificados este miércoles a las partes, las solicitudes cursadas por los familiares de esos dos fallecidos, al entender que no puede establecerse “un nexo causal” entre esas muertes y los hechos objeto de la investigación.

La magistrada también ha rechazado en un tercer auto la inclusión como víctima en estas diligencias previas de una mujer que había presentado una denuncia en la que refiere que padece lesiones psicológicas.

“Es indudable que la DANA produjo un impacto y perjuicio a la denunciante y a sus hijos. Sin embargo, no es factible ni la investigación en este procedimiento penal del delito de omisión del deber de socorro ni de lesiones psicológicas imprudentes como se estableció de forma definitiva en auto de la Audiencia Provincial de 17 de mayo de 2025”, responde la instructora a esa petición.

La jueza ha emitido hoy otros dos autos y una providencia. En esta última, entre otras cosas, requiere a la Policía Judicial de la Guardia Civil que realice las gestiones necesarias a fin de que la empresa de telefonía o titular de las redes sociales WhatsApp y Telegram intenten recuperar los mensajes relacionados con la gestión de la emergencia que intercambié el 29 de octubre de 2024 el que fuera jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón con éste y otros seis cargos públicos.



Respecto a los dos autos antes citados, en uno de ellos desestima el recurso de una acusación particular que pidió que la declaración testifical del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebrada el pasado 9 de enero se llevara a cabo de forma presencial y no telemática, mientras que en el segundo deniega la petición de otro letrado relativa a la ampliación de un oficio que requería información a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre agentes medioambientales y la vigilancia de ríos y barrancos.

## **Absuelto el expresidente de Invercaria y a otros cuatro acusados en una pieza separada del caso por los préstamos a Operador Aéreo Ándalus**

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto al expresidente de Invercaria Tomás P-S.P. y a otras cuatro personas de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por los que fueron juzgados durante los pasados meses de octubre y noviembre en una pieza separada del caso Invercaria por los préstamos participativos concedidos a la mercantil Operador Aéreo Ándalus S.A., constituida el 28 de noviembre de 2007 con la finalidad de crear una compañía aérea andaluza para el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecía la región como emisora y receptora de vuelos.

En la vista oral, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular ejercida por el PP retiraron la acusación contra una investigada y solicitaron, para el expresidente de Invercaria, seis años de cárcel e inhabilitación absoluta por tiempo de quince años por el delito de malversación, así como la pena de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, mientras que para los otros tres encausados reclamaron dos años y medio de prisión y cinco años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación y seis años de inhabilitación para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.

En concepto de responsabilidad civil, pidieron que los acusados indemnizaran de manera conjunta y solidaria con un total de 1.320.844 euros a la Agencia IDEA, mientras que las defensas de los investigados solicitaron su libre absolución.

En la sentencia, fechada el día 16 de enero y notificada hoy miércoles a las partes, la Sección Séptima de la Audiencia considera probado que Operador Aéreo Ándalus fue constituida en noviembre de 2007, siendo socios fundadores dos de los acusados junto con una tercera persona y participando en el capital con las acciones mencionadas en la escritura fundacional, mientras que otro de los acusados, José María M.D., quien conocía previamente a este último por haber sido su abogado, asumió a través de su despacho la llevanza de la Secretaría del Consejo de Administración y asumió además la



presidencia de la mercantil, aunque el 8 de febrero de 2008 también pasó a formar parte de la empresa como socio, de forma que la asesoría jurídica y la llevanza de la Secretaría pasó a ser desempeñada por otro bufete.

Los magistrados señalan que, a finales de 2007, la mercantil, “buscando la necesaria financiación” para su proyecto, presentó el mismo a estudio a Corporación Financiera Caja Granada, donde se llevó a cabo el análisis de dicho proyecto a partir de diciembre de 2007, mientras que la posibilidad de financiar el proyecto también fue estudiada por Invercaria, aunque el tribunal asegura que “no consta que el proyecto” llegara a Invercaria “de la mano” del acusado José María M.D. “por el hecho de haber sido en el pasado consejero de la Junta de Andalucía (...)”.

#### Primer préstamo participativo de 410.000 euros

En este sentido, la Audiencia indica que, el día 3 de noviembre de 2008, Operador Aéreo Ándalus recibió de Invercaria un préstamo participativo de 410.000 euros y otro préstamo del socio financiero Corporación Caja Granada por importe de 1.110.000 euros, una operación que se formalizó conjuntamente con una entrada en capital de Invercaria por importe de 40.000 euros. “Ambas operaciones de Invercaria, por razón de su importe, que no superaba los 450.000 euros, fueron adoptadas por el presidente de la entidad dentro del límite cuantitativo de sus competencias, sin perjuicio de dar cuenta al Consejo de Administración de Invercaria el 9 de diciembre de 2008”, puntualiza.

Los magistrados añaden que la operación fue analizada por el Departamento de Inversiones de Invercaria, en coordinación con el coinversor Corporación Caja Granada, existiendo el correspondiente preinforme de inversión y memorando, señalando que la operación fue avalada mediante garantías personales de los propios socios, “avales que han sido finalmente ejecutados”.

Según resaltan, Operador Aéreo Ándalus “no operó vuelos durante el año 2008, siendo un factor determinante para ello el retraso en la concesión de las licencias administrativas necesarias, generando ello gastos improductivos de primer establecimiento”, de manera que la licencia de primera explotación fue concedida en enero de 2009.

La Audiencia indica que, el día 29 de julio de 2009, Invercaria formalizó un nuevo préstamo a la mercantil por importe de 700.000 euros, “siendo la previsión en ese momento la participación en el concurso para la concesión de la línea Sevilla-Almería, con los consiguientes gastos e inversiones necesarios para cumplir los requisitos que exigía tal licitación”.

Al hilo de ello, el tribunal agrega que esta inversión fue analizada en el departamento de Análisis de Invercaria, “presentando en ese momento Operador Aéreo Ándalus una situación financiera comprometida, con fondos negativos, si bien no se encontraba en

causa legal de disolución, por el cómputo de los préstamos participativos como patrimonio neto, de conformidad con la legislación mercantil, y analizándose en dichos momentos el proyecto como un proyecto viable, y estratégicamente interesante, desde el punto de vista de las expectativas que generaba, teniendo en cuenta las posibilidades del sector turístico andaluz y el número de vuelos dentro de su territorio”.

Los magistrados afirman que, para el desarrollo de su actividad, en la que llegó a facturar ocho millones de euros y a viajar con más de 80.000 pasajeros, Operador Aéreo Ándalus había obtenido en el mes de enero de 2009 de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea la preceptiva licencia de explotación, previo análisis y evaluación por dicho organismo de su capacidad económico financiera y demás condiciones exigidas. Esta licencia de explotación estuvo vigente de forma ininterrumpida hasta el 15 de julio de 2010.

“No obstante, por diversas circunstancias, entre ellas la falta de inversión de algunos socios, el retraso en el inicio de la actividad por el tiempo transcurrido hasta la concesión de la licencia, con los consiguientes gastos por inactividad y el impacto de dicho escenario asimismo de la crisis económica mundial del momento, llevaron al no cumplimiento finalmente de las expectativas del proyecto, de manera que suspendida la licencia de explotación el 16 de julio de 2010, el 28 de julio de 2010 Operador Aéreo Ándalus dejó de operar todos sus vuelos”, considera probado la sentencia.

“El proyecto fue suficientemente estudiado, documentado y analizado”

La Sección Séptima expone que “no se evidencia que los acusados con la conducta enjuiciada incurrieran, bien por acción directa, bien por inducción, en una actuación respecto de la disposición de fondos públicos con apartamiento grosero y manifiesto del Derecho, apartamiento del Derecho que una resolución prevaricadora/malversadora exige para ser calificada de tal, por lo que tampoco puede estimarse que existiese malversación”.

Y ello, según el tribunal, porque “se trató de un proyecto real y serio iniciado en una época aún de expansión de la economía”, de forma que el proyecto “fue suficientemente estudiado, documentado, analizado e informado por los técnicos de los departamentos de Invercaria y en este caso también de Caja Granada”, tras lo que posteriormente “contó con la asesoría jurídica de un despacho para la formalización de los contratos de préstamo participativo, existiendo en el proyecto el dato adicional significativo de haber estado la sociedad sometida a los exigentes controles de los organismos competentes, entre otros la Agencia Estatal de Seguridad Aérea”.

“A ello se suma, en lo que se refiere al delito de malversación, que en absoluto consta que cantidad alguna procedente de estos préstamos concedidos por Invercaria fuera dedicado por Operador Aéreo Ándalus a fines distintos de los que constituían su proyecto, en lo que han sido unánimes todos los declarantes en la vista oral”, sostienen los magistrados en la sentencia, contra la que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

## **El TS rechaza la petición de la CAM de suspender doce actos de iniciación de procedimientos de traslado de menores extranjeros no acompañados**

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid de suspender un total de doce actos de iniciación de procedimientos de traslado a dicha Comunidad de menores extranjeros no acompañados.

Según explica el tribunal en un auto, los menores se encuentran en Ceuta y en Canarias y los actos administrativos fueron dictados por las oficinas de extranjería dependientes de la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta y de las Subdelegaciones del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

El cauce de impugnación elegido por la recurrente es la vía de hecho que imputa al Gobierno de España por no haber dictado la norma que determine el número de menores que han de desplazarse a cada comunidad autónoma receptora. Al respecto, el tribunal contesta que la medida que se interesa choca con un importante obstáculo, y es que la vía de hecho constituye una «actuación material», lo que no es predicable de unos actos formales, de mero trámite, cuyo contenido se restringe a disponer la iniciación de un procedimiento administrativo.

Asimismo, el tribunal señala que la suspensión de los procedimientos y, con ello, la paralización del traslado de los menores provocaría graves daños. Recuerda que, en su auto de 25 de marzo de 2025 dictada en otro procedimiento, apreció que los menores extranjeros no acompañados se encontraban en Canarias en un notorio estado de hacinamiento, en abierta incompatibilidad con el superior interés del menor que es de obligada salvaguarda por los poderes públicos.

“Si ahora acordamos la suspensión de las disposiciones tomadas por la Administración del Estado con el propósito de evitar esta situación, entonces no solo caeríamos en contradicción con nuestra anterior resolución, sino que facilitaríamos el mantenimiento de unas circunstancias que ya hemos considerado gravemente perjudiciales para los menores”, añade el Supremo.

Tampoco puede olvidarse, para el Supremo, la incidencia que en las Administraciones autonómicas ha tenido la entrada excepcional de menores en un corto periodo de tiempo.

“La declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria en Ceuta y en Canarias supone que ha sido superada en tres veces la capacidad ordinaria de su sistema de protección y tutela de menores de edad extranjeros no acompañados. Sin duda, esta eventualidad ha afectado negativamente a las Administraciones autonómicas, que se han visto forzadas a dedicar especiales recursos asistenciales a los menores migrantes, medidas que deberían proseguir en caso de que esta Sala tomara la medida de suspender los procedimientos de traslado”.

El auto concluye que, “en definitiva, no son apreciables las condiciones necesarias para suspender la ejecución de los actos de iniciación de los procedimientos objeto del recurso, sin que quepa ahora pronunciarnos sobre otras cuestiones que afectan a la competencia de la Sala o a la adecuada calificación de la acción ejercitada por la actora”.

## **El TSJCLM declara improcedente el despido del conserje de un edificio de viviendas al calcularle una antigüedad inferior a la real**

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha estimado el recurso del conserje de un inmueble residencial y declara improcedente su despido por la comunidad de propietarios, que tendrá que readmitirle o indemnizarle con 15.076,47 euros.

Los hechos probados relatados por la sentencia de un juzgado Social de Ciudad Real declara que el recurrente trabaja desde 2018 con contrato indefinido a tiempo completo en la modalidad de personas con discapacidad con un salario mensual neto de 1.100 euros. Hasta ese momento y desde que comenzó la relación laboral en 2014, había tenido contrato temporal a tiempo parcial.

En la Junta General de propietarios del 8 de abril de 2024 se acordó prescindir del trabajador y serían los propietarios quienes se harían cargo de las tareas de limpieza y reparaciones menores. El 7 de mayo el portero recibió una carta de despido fechada el 30 de abril comunicándole su despido objetivo por causas económicas y en la que se calculaba una indemnización de 6.289,04 euros correspondiente a 20 días de salario por año de servicio con el límite de doce mensualidades computando una antigüedad desde el 1 de junio de 2017. La comunidad arrastraba desde 2019 una situación de creciente dificultad económica debido al aumento progresivo de gastos y a la morosidad entre los propietarios.

En su fundamentación jurídica, los magistrados recuerdan que al actor se le reconoció una indemnización 6.289,04 euros sobre una antigüedad del 01/06/2017, pero la juez de instancia explica que la relación laboral se inicia el 06/05/2014, por lo que el despido objetivo sería de 9.137,26 euros, es decir, con una diferencia de 2.848,22 euros. Añaden que la prestación del servicio se llevó a cabo sin interrupción y durante todo este periodo ha realizado las mismas funciones y ha tenido las mismas condiciones.

“En definitiva -expresan los magistrados- hemos de concluir que la conducta de la empresa, en perjuicio del trabajador al computar una antigüedad tres años inferior a la real sin justificación alguna, constituye un error inexcusable en el cálculo de la indemnización que obliga a declarar improcedente el despido objetivo”.

El tribunal, por lo tanto, estima la declaración de improcedencia concluyendo que la demandada debe optar, a su elección y en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente sentencia, entre la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que tenía hasta la fecha o satisfacer una indemnización de 15.076,47 euros atendiendo a su salario y antigüedad. La sentencia no es firme y puede ser recurrida.

## **El TSJ de Madrid confirma la sentencia del ‘caso Mascarillas’: condenas por delito fiscal y falsedad documental**

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal, el Ayuntamiento de Madrid, la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A., y las acusaciones populares, y ha confirmado en su integridad la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en el conocido como ‘caso Mascarillas’.

El tribunal ratifica la condena impuesta a Alberto L. como autor de un delito de falsedad en documento oficial y de un delito contra la Hacienda Pública y mantiene la absolución de él y de Luis M.A. de los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil por los que habían sido acusados en relación con la intermediación en la compra de material sanitario durante la primera fase de la pandemia de la COVID-19.

La sentencia confirma la condena a Alberto L. a ocho meses de prisión y multa por un delito de falsedad en documento oficial, así como a tres años de prisión y multa de 3,5 millones de euros por un delito contra la Hacienda Pública. Asimismo, se mantiene la obligación de indemnizar a la Agencia Tributaria con 1.351.386,29 euros, correspondientes a la cuota defraudada en el IRPF del ejercicio 2020, más los intereses legales, así como la pérdida del derecho a obtener ayudas públicas y beneficios fiscales durante seis años.

El tribunal considera acreditado que Alberto L. utilizó documentación falsa —entre ella, identificaciones y escritos con apariencia oficial— para fines ajenos a los estrictamente administrativos, y que imputó indebidamente a una sociedad mercantil de nueva creación unos rendimientos profesionales que correspondían a su actividad personal, con el objetivo de reducir de forma ilícita su carga tributaria.

La Sala confirma igualmente la absolución de ambos acusados respecto de los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil relacionados con los contratos de suministro de mascarillas, guantes y test de anticuerpos al Ayuntamiento de Madrid, a través de su empresa municipal.

El tribunal concluye que no ha quedado acreditado que existiera engaño penalmente relevante, ni que el eventual desconocimiento de las comisiones percibidas por los intermediarios fuera determinante para la formación de la voluntad contractual de la entidad compradora. La sentencia subraya que las decisiones de compra se adoptaron atendiendo al precio final, las características del producto y las condiciones de entrega, sin que la existencia o cuantía de las comisiones formara parte esencial del consentimiento.

Asimismo, la Sala destaca que no se ha probado que los acusados conocieran de antemano las incidencias posteriores en la calidad de algunos de los suministros, ni que actuaran con ánimo defraudatorio en perjuicio del Ayuntamiento o de la empresa municipal.

En su fundamentación jurídica, el TSJ de Madrid recuerda los límites legales y constitucionales para revocar sentencias absolutorias en segunda instancia, especialmente cuando la pretensión de las acusaciones exige una nueva valoración de pruebas personales practicadas en el juicio oral. La Sala considera que la sentencia de instancia está suficientemente motivada, no es arbitraria ni ilógica y se ajusta a las reglas de la sana crítica.

En consecuencia, el tribunal desestima todos los recursos interpuestos y confirma en su integridad el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, poniendo fin en esta instancia al procedimiento penal derivado del denominado ‘caso Mascarillas’, si bien cabe recurso de casación.

La empresa abrió un expediente disciplinario y, tras las alegaciones del trabajador, acordó su despido disciplinario el 22 de junio de 2023, fundamentándolo en “desobediencia, transgresión de la buena fe contractual y abandono del servicio”.

En su sentencia, el T SJ de Extremadura confirma íntegramente la resolución del Juzgado de lo Social nº 2 de Badajoz, concluyendo que el comportamiento del trabajador “resulta incompatible con las exigencias de un servicio esencial como es el transporte sanitario urgente” y que el abandono del puesto generó un riesgo evidente para la ciudadanía al quedar inoperativa una ambulancia disponible 24 horas.

Además, considera que el empleado contaba con alternativas legales para impugnar la denegación del permiso, pero no podía desobedecer la orden empresarial ni abandonar el servicio.

## **Puede adoptarse una decisión de retorno contra un nacional de un país tercero en situación irregular que cumple una pena de prisión**

Según el Abogado General Spielmann, puede adoptarse una decisión de retorno contra un nacional de un país tercero en situación irregular que cumple una pena de prisión de larga duración.

En 2015, un nacional azerbaiyano fue condenado por un órgano jurisdiccional neerlandés a una pena de cadena perpetua por varios homicidios cometidos en mayo de 2011. En 2018, a raíz de esta condena, se retiró su permiso de residencia con efectos retroactivos a 12 de mayo de 2011. Asimismo, se le ordenó que abandonara inmediatamente el territorio de la Unión Europea.

En 2020, un nacional afgano fue condenado por un órgano jurisdiccional neerlandés a una pena de prisión de 25 años por dos asesinatos en grado de tentativa con fines terroristas, cometidos el día de su entrada en los Países Bajos. Había entrado en dicho Estado miembro desde Alemania en 2018, después de que su solicitud de asilo, presentada en este último país, fuera definitivamente denegada. En 2023, el Ministro neerlandés de Asilo y Migración le ordenó abandonar inmediatamente el territorio de la Unión.

Se trata de saber si en estos dos casos puede adoptarse válidamente una decisión de expulsión, cuando no es posible proceder a la expulsión debido a la ejecución de una pena de prisión de larga duración.

El Consejo de Estado neerlandés, que conoce de ambos asuntos, decidió consultar al Tribunal de Justicia. Señala que la Directiva 2008/115 parece imponer la obligación de adoptar una decisión de retorno en una situación como esta, pero no determina claramente la articulación de esta obligación con la circunstancia de que quede excluida cualquier posibilidad de retorno efectivo durante un largo período de tiempo.



Además, en el supuesto de que el Ministro de Asilo y Migración no estuviera facultado para adoptar una decisión de retorno, el Consejo de Estado neerlandés desea determinar si aquel estaba entonces obligado a conceder un permiso de residencia a las dos personas de que se trata, con el fin de evitar una situación en la que estas permanecieran ilegalmente en el territorio del Estado miembro de que se trata sin poder ser, por otra parte, objeto de un procedimiento de retorno.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Spielmann considera que la Directiva 2008/115 no se opone a la adopción de una decisión de retorno contra un nacional de un país tercero en situación irregular que cumple una larga pena de prisión y cuya expulsión solo se producirá una vez cumplida esta. Sin embargo, las autoridades deben comprobar periódicamente si la expulsión puede contemplarse concretamente en función de la situación penal del interesado.

En cambio, la Directiva se opone a la adopción de una decisión de retorno cuando una cadena perpetua no revisable elimine toda perspectiva de expulsión, ya que esta resultaría imposible de hecho. Por otra parte, la Directiva no impone a un Estado miembro la obligación de conceder un permiso de residencia a un nacional de un país tercero en situación irregular durante la ejecución de su pena privativa de libertad.